



Crimen Transnacional En La Frontera Colombo - Brasileña: Diplomacia Militar, Seguridad y Defensa

Mayor (EJC) Diego Díaz Moreno

Capítulo de libro para optar al título profesional:
Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia
2025

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante	: Mayor Diego Díaz Moreno
Identificación	: CC. 1098603719
Programa académico	: Maestría en Estrategia y Geopolítica
Tutor metodológico	: My ® PHD Oscar Orlando Porras Rodríguez
Tutor temático	: Tc. ® Willian Alfredo Sierra Gutiérrez
Fecha de entrega	:
Extensión	:

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este capítulo de libro fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este capítulo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este capítulo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Crimen Transnacional en la Frontera Colombo - Brasileña: Diplomacia Militar, Seguridad y Defensa

Mayor Diego Díaz Moreno¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Coautora, Viviana Alejandra Calles Arias*

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: El presente capítulo analiza el impacto del crimen transnacional en la frontera colombo - brasileña, enfocándose en el rol de la diplomacia militar y los mecanismos de cooperación en seguridad y defensa. Desde un enfoque cualitativo, y mediante análisis documental e investigación de casos, se identifican las principales redes delictivas como disidencias armadas, organizaciones brasileñas como el Primeiro Comando da Capital, PCC y el Comando Vermelho, y estructuras dedicadas a la minería ilegal y la trata de personas, así como sus modos de operación basados en rutas fluviales, corrupción institucional y alianzas transfronterizas. Asimismo, se examinan las consecuencias políticas, económicas y sociales de estas actividades, tales como la pérdida de gobernabilidad, el deterioro ambiental y la precarización de las comunidades locales. Se concluye que, aunque existen esfuerzos bilaterales entre Colombia y Brasil, la efectividad de los mecanismos actuales de cooperación aún enfrenta desafíos críticos, como la falta de integración normativa y tecnológica. La investigación sostiene que una diplomacia militar fortalecida y estrategias de seguridad más integradas son esenciales para contener el crimen organizado en esta zona estratégica de América del Sur.

Palabras clave: Crimen transnacional, diplomacia militar, seguridad fronteriza, cooperación regional, defensa nacional.

¹ Mayor Diego Díaz Moreno, Candidato a Magíster en Estrategia y Geopolítica, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0009-0008-0255-1072> - Contacto: diego.diazmo@esdeg.edu.co <https://orcid.org/>

* Viviana Alejandra Calles Arias, Historiadora, Universidad del Tolima, Magíster en Historia, Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador. Gestora de Investigación de Departamento de Estrategia, ESDEG. <https://orcid.org/0000-0002-2813-7928>- Contacto: vcalles@ut.edu.co

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Introducción

La frontera entre Colombia y Brasil constituye una región de alta sensibilidad geopolítica, caracterizada por su densa biodiversidad, la presencia de comunidades indígenas y una creciente urbanización en medio de condiciones geográficas extremas. Este territorio ha sido históricamente permeado por múltiples desafíos vinculados al crimen transnacional, manifestado a través del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que comprometen la estabilidad de los Estados involucrados. La convergencia de estos fenómenos ha propiciado una creciente inseguridad en la región, erosionando la institucionalidad estatal y debilitando la gobernabilidad.

El Crimen Transnacional, entendido como aquellas actividades ilícitas que cruzan fronteras nacionales y que requieren respuestas cooperativas entre Estados (UNODC, 2021), ha evolucionado hacia formas cada vez más sofisticadas, integrando redes globales que incluyen el lavado de activos, la explotación laboral, la ciberdelincuencia y la captura institucional. Investigaciones recientes han evidenciado la consolidación de alianzas entre grupos armados colombianos y organizaciones criminales brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), lo que ha profundizado los flujos ilícitos en el corredor amazónico. A pesar de la existencia de mecanismos bilaterales de cooperación, los vacíos normativos, la debilidad institucional y las limitaciones logísticas en zonas de difícil acceso continúan obstaculizando la acción coordinada.

En este contexto, la diplomacia militar se presenta como una herramienta complementaria de política exterior que permite a los Estados proyectar cooperación en defensa, ejecutar operaciones conjuntas y fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas

armadas (Cottey & Forster, 2004). Su papel ha sido estudiado en escenarios de seguridad cooperativa, pero su implementación en zonas fronterizas con alto riesgo criminal, como la colombo-brasileña, aún requiere análisis más profundos (Cooper & Cornish, 2017). La presente investigación responde a esta necesidad al explorar cómo la diplomacia militar puede actuar como mecanismo eficaz para contener amenazas transnacionales, aportando a la estabilidad y seguridad regional.

Este estudio se justifica en la urgencia de proponer estrategias integrales que articulen defensa, desarrollo sostenible y presencia estatal efectiva en zonas periféricas. Además, su importancia radica en que contribuye al diseño de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza, al tiempo que promueve una visión regional de la cooperación ante amenazas criminales compartidas. En particular, el análisis de la frontera colombo-brasileña ofrece un laboratorio estratégico para examinar los desafíos de la seguridad multidimensional en América Latina.

A partir de ello, se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo influyen las redes de crimen transnacional en la estabilidad política, económica y social en la frontera colombo-brasileña? Para responder a esta cuestión, el artículo se propone desarrollar los siguientes objetivos: identificar las principales redes de crimen transnacional que operan en la región y sus modos de operación; evaluar el impacto del crimen organizado sobre la estabilidad política, económica y social; analizar los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en seguridad y defensa; y, finalmente, proponer estrategias para el fortalecimiento de la cooperación fronteriza en el marco de la diplomacia militar.

Metodología

Para abordar este fenómeno, la presente investigación adopta una metodología cualitativa, la cual permite comprender en profundidad la dinámica del crimen transnacional y la efectividad de la diplomacia militar como herramienta de seguridad y defensa en la frontera colombo-brasileña. Se empleará el análisis documental de informes oficiales de organismos internacionales, estudios académicos, normativas gubernamentales y acuerdos bilaterales. Asimismo, se realizarán entrevistas semiestructuradas con expertos en seguridad y defensa, analizando percepciones sobre los desafíos y oportunidades en la cooperación bilateral. Adicionalmente, se aplicará la técnica del estudio de caso para examinar operaciones conjuntas realizadas entre Colombia y Brasil, evaluando su impacto en la reducción del crimen transnacional.

El enfoque cualitativo resulta pertinente dado que la seguridad fronteriza es un fenómeno multidimensional influenciado por factores políticos, económicos y sociales. La recolección y análisis de datos permitirá identificar patrones, tendencias y áreas de mejora en la cooperación militar entre ambos países, facilitando el diseño de estrategias más efectivas para el control del crimen organizado en la región amazónica.

La interrelación entre el crimen transnacional y la diplomacia militar es fundamental para la presente investigación, ya que permite analizar cómo la cooperación en defensa y seguridad puede contribuir a la contención de redes criminales y a la protección de los territorios fronterizos. A través de la revisión de acuerdos de cooperación, estudios de caso y análisis de estrategias implementadas, este estudio evaluará la efectividad de los mecanismos de diplomacia militar en la lucha contra el crimen transnacional en la frontera colombo-brasileña.

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, el cual permite comprender en profundidad la dinámica del crimen transnacional y evaluar la efectividad de la diplomacia militar como herramienta de seguridad y defensa en la frontera colombo-brasileña. Según Creswell (2013), el enfoque cualitativo es adecuado para el estudio de fenómenos sociales complejos, ya que permite analizar percepciones, experiencias y contextos específicos en su totalidad. Este enfoque se justifica dado que la seguridad fronteriza es un fenómeno multidimensional influenciado por factores políticos, económicos y sociales, lo que requiere un análisis interpretativo que no puede reducirse a meras cifras cuantitativas (Denzin & Lincoln, 2018).

Para la recolección de datos, se emplearán tres técnicas principales: análisis documental y estudio de caso. Según Bowen (2009), el análisis documental es una técnica clave en la investigación cualitativa, ya que permite la revisión sistemática de informes oficiales, normativas gubernamentales, tratados de cooperación, documentos académicos y estudios previos sobre crimen transnacional y seguridad fronteriza. Esta fase permitirá construir un marco de referencia sólido sobre el contexto de la región y los mecanismos existentes de cooperación bilateral entre Colombia y Brasil.

Finalmente, se aplicará la técnica del estudio de caso, un enfoque metodológico ampliamente utilizado en las ciencias sociales para analizar fenómenos en contextos reales (Yin, 2018). Se examinarán operaciones conjuntas específicas realizadas entre Colombia y Brasil en la frontera amazónica, analizando casos concretos de cooperación militar, estrategias de interdicción y misiones de seguridad que han sido implementadas en la región, evaluando sus logros, limitaciones y lecciones aprendidas.

Para el análisis de los datos, se empleará un enfoque de análisis temático, una técnica recomendada por Braun y Clarke (2006) que permite identificar patrones y tendencias en los discursos de los entrevistados, así como en la información extraída de los documentos revisados. La triangulación de fuentes garantizará la validez de los hallazgos, permitiendo contrastar distintas perspectivas sobre la cooperación en seguridad y su impacto en la contención del crimen transnacional en la frontera colombo-brasileña (Patton, 2015).

En síntesis, la metodología cualitativa utilizada en esta investigación proporcionará un análisis integral y crítico sobre la relación entre diplomacia militar y lucha contra el crimen organizado en la región amazónica, contribuyendo a la formulación de estrategias más eficaces para fortalecer la seguridad fronteriza entre Colombia y Brasil.

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, el cual permite comprender en profundidad la dinámica del crimen transnacional y evaluar la efectividad de la diplomacia militar como herramienta de seguridad y defensa en la frontera colombo-brasileña. Este enfoque se justifica dado que la seguridad fronteriza es un fenómeno multidimensional influenciado por factores políticos, económicos y sociales, lo que requiere un análisis interpretativo que no puede reducirse a meras cifras cuantitativas.

Para la recolección de datos, se emplearán tres técnicas principales: análisis documental y estudio de caso. El análisis documental consistirá en la revisión de informes oficiales de organismos internacionales, normativas gubernamentales, tratados de cooperación, documentos académicos y estudios previos sobre crimen transnacional y seguridad fronteriza. Esta fase permitirá construir un marco de referencia sólido sobre el contexto de la región y los mecanismos existentes de cooperación bilateral entre Colombia y Brasil.

Finalmente, se aplicará la técnica del estudio de caso para examinar operaciones conjuntas específicas realizadas entre Colombia y Brasil en la frontera amazónica. Se analizarán casos concretos de cooperación militar, estrategias de interdicción y misiones de seguridad que han sido implementadas en la región, evaluando sus logros, limitaciones y lecciones aprendidas.

Para el análisis de los datos, se empleará un enfoque de análisis temático, identificando patrones y tendencias en los discursos de los entrevistados, así como en la información extraída de los documentos revisados. La triangulación de fuentes garantizará la validez de los hallazgos, permitiendo contrastar distintas perspectivas sobre la cooperación en seguridad y su impacto en la contención del crimen transnacional en la frontera colombo-brasileña. En síntesis, la metodología cualitativa utilizada en esta investigación proporcionará un análisis integral y crítico sobre la relación entre diplomacia militar y lucha contra el crimen organizado en la región amazónica, contribuyendo a la formulación de estrategias más eficaces para fortalecer la seguridad fronteriza entre Colombia y Brasil.

Principales redes de crimen transnacional en la frontera colombo-brasileña

La frontera entre Colombia y Brasil es un territorio estratégico para diversas organizaciones criminales transnacionales que han consolidado su presencia debido a su difícil acceso, la limitada presencia estatal y las vastas rutas fluviales que facilitan el tráfico ilegal de bienes y personas (UNODC, 2021). Esta región, caracterizada por su densa selva y su baja densidad poblacional, ha permitido la proliferación de economías ilícitas que generan un impacto significativo en la seguridad y el desarrollo de ambos países.

Figura 1. Triple Frontera Brasil, Colombia, Perú



Fuente: Comando de Fronteira do Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva

Tras el Acuerdo de Paz de 2016, diversas facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han mantenido su presencia en la región amazónica, controlando rutas del narcotráfico y participando en actividades ilícitas como la minería ilegal y la trata de personas (Insight Crime, 2022). Estas estructuras criminales han establecido alianzas con organizaciones brasileñas para el transporte de cocaína a través de la selva y los ríos fronterizos. Se estima que los grupos disidentes han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante el cobro de “impuestos” a la producción y transporte de drogas, además del control sobre pasos fronterizos clandestinos.

El Comando Vermelho (CV) Esta organización criminal brasileña, originaria de Río de Janeiro, ha expandido sus operaciones hacia la Amazonía, consolidando su presencia en ciudades fronterizas como Tabatinga y Leticia. Su principal actividad en la región es la compra de cocaína a grupos colombianos, para luego transportarla a Brasil y otros mercados

internacionales (García & Ramírez, 2018). Además de su involucramiento en el narcotráfico, el CV participa en el tráfico de armas y en la explotación ilegal de recursos naturales. Su modelo de operación se basa en la violencia sistemática contra grupos rivales y el control territorial mediante la intimidación y el asesinato selectivo de líderes comunitarios.

Así mismo se identificó, el Primeiro Comando da Capital (PCC) Fundado en São Paulo, el PCC es una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y ha establecido alianzas con redes colombianas de narcotráfico. Controla rutas terrestres y fluviales para el transporte de drogas y armas, y ha incrementado su influencia en la frontera amazónica a través de sobornos y violencia contra grupos rivales (Silva, 2020). Esta organización es conocida por su estructura jerárquica altamente disciplinada y su capacidad de coordinar operaciones logísticas a gran escala. Su dominio se ha extendido hacia el tráfico de migrantes y la explotación laboral en sectores informales de la economía fronteriza.

Además del narcotráfico, la extracción ilegal de oro se ha convertido en una actividad altamente lucrativa en la frontera colombo-brasileña. Redes criminales controlan yacimientos clandestinos y emplean mercurio de manera indiscriminada, causando daños ambientales severos en la región (Rodríguez & Pérez, 2019). Estas redes suelen estar vinculadas a grupos armados que imponen su dominio mediante la violencia y la coerción sobre comunidades locales. La minería ilegal ha desplazado a numerosas comunidades indígenas y ha generado conflictos entre organizaciones criminales por el control de territorios estratégicos.

La frontera amazónica es utilizada por redes criminales especializadas en la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Muchas víctimas son indígenas o migrantes venezolanos que atraviesan la región en busca de mejores condiciones de vida y terminan en manos de traficantes. Estas organizaciones operan en coordinación con grupos

delictivos en Brasil y Colombia para el traslado ilegal de personas hacia centros urbanos donde son explotadas. Además, estas redes utilizan rutas de narcotráfico para facilitar el desplazamiento de migrantes en condiciones de vulnerabilidad, lo que ha generado un incremento en los casos de desapariciones y violencia de género en la región.

Las redes de crimen transnacional en la frontera colombo-brasileña han desarrollado estrategias sofisticadas para evitar la detección y maximizar sus beneficios ilícitos. Entre sus principales modos de operación se identifican el uso de rutas fluviales y selváticas: Los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá son utilizados como corredores de tráfico de drogas, armas y recursos ilegales. Las embarcaciones clandestinas transportan cargamentos ilícitos a través de la frontera con facilidad, evitando controles de las fuerzas de seguridad (UNODC, 2021).

Además, los traficantes emplean lanchas rápidas y embarcaciones camufladas como transportes comerciales para evadir la detección. así como, la corrupción e infiltración institucional: Las organizaciones criminales han recurrido a sobornos y extorsión para garantizar el paso seguro de sus cargamentos y proteger sus operaciones. Autoridades locales, funcionarios aduaneros y miembros de las fuerzas de seguridad han sido cooptados en algunos casos, debilitando los esfuerzos de control estatal (Rodríguez & Pérez, 2019).

Por lo tanto, la falta de supervisión efectiva y el déficit de recursos en las fuerzas de seguridad han permitido la consolidación de estas prácticas corruptas. Las alianzas criminales transfronterizas: Las redes delictivas han establecido acuerdos estratégicos para compartir rutas, logística y protección. Por ejemplo, disidencias de las FARC han negociado con el PCC y el Comando Vermelho el suministro de cocaína a cambio de armas y apoyo logístico en Brasil (Silva, 2020). Estas alianzas han fortalecido la capacidad operativa de las organizaciones criminales, facilitando su expansión y permanencia en la región.

Algunas organizaciones han reclutado habitantes de la región, incluyendo comunidades indígenas, para el transporte de drogas o la explotación ilegal de recursos naturales. Esto genera dependencia económica y refuerza el control social de los grupos criminales en la zona (García & Ramírez, 2018). En muchos casos, los grupos delictivos han obligado a comunidades indígenas a participar en el procesamiento de cocaína y otras actividades ilícitas. Aunque el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de ingresos, los grupos criminales han diversificado sus actividades hacia la minería ilegal, la deforestación y la trata de personas, lo que les permite mantener operaciones lucrativas incluso cuando aumentan los esfuerzos de interdicción. Esta diversificación ha generado una economía ilícita altamente interconectada, donde diferentes delitos se complementan y refuerzan mutuamente.

La convergencia de estos factores hace que la frontera colombo-brasileña sea un punto crítico en la lucha contra el crimen transnacional. La comprensión de las dinámicas delictivas y la identificación de los actores involucrados es clave para el diseño de estrategias de cooperación en seguridad y defensa que permitan mitigar su impacto en la región. Tráfico de drogas: Colombia ha sido históricamente el mayor productor mundial de cocaína, mientras que Brasil se ha consolidado en las últimas décadas como un importante país de tránsito e incluso consumidor emergente de drogas ilícitas.

En la Amazonía fronteriza, estas tendencias confluyen. Organizaciones narcotraficantes colombianas, incluyendo disidencias de las FARC y otros grupos armados residuales, utilizan corredores selváticos en departamentos como el Guainía, Vaupés y Amazonas para sacar cocaína hacia Brasil, donde carteles brasileños la distribuyen internamente o la envían a mercados internacionales. Investigaciones recientes señalan que

la zona de Leticia (Colombia) – Tabatinga (Brasil), ciudades gemelas en plena selva, se ha convertido en un hub logístico para diversos mercados ilícitos: cocaína, cannabis, fauna silvestre exótica y oro ilegal circulan por esta triple frontera (Colombia-Brasil-Perú) impulsados por alianzas entre grupos criminales de ambos países.

Bandas criminales brasileñas como el *Comando Vermelho* (CV) y el *Primeiro Comando da Capital* (PCC) originarias de Río de Janeiro y São Paulo, respectivamente han extendido su alcance hasta la frontera colombiana. Estos grupos, otrora limitados a actuar como intermediarios compradores de droga a las guerrillas colombianas, ahora han establecido bases más permanentes en ciudades amazónicas, disputándose territorios y rutas estratégicas.

De hecho, CV y PCC han cooptado pobladores locales e incluso miembros de comunidades indígenas para integrarlos en la cadena del narcotráfico (como transportadores fluviales o vigilantes), afianzando su control territorial. Un acuerdo criminal binacional de facto se evidencia en cómo intercambian recursos: históricamente, estos carteles brasileños suministraban armas a cambio de cargamentos de droga de las FARC, facilitando un flujo transfronterizo de armas por cocaína que alimentó tanto el conflicto colombiano como el poder de las facciones criminales en Brasil. Este fenómeno persiste con las disidencias actuales: por ejemplo, se ha documentado que grupos como la *Nueva Marquetalia* o el *Estado Mayor Central* (disidencias FARC) mantienen conexiones con bandas brasileñas para el comercio de cocaína, recibiendo a cambio dinero y armamento que les permite continuar operando en zonas selváticas. Como resultado, el tráfico de drogas en la frontera colombo-brasileña no solo es un negocio lucrativo sino también un motor de violencia e inseguridad, conforme estas redes se fortalecen, se registran incrementos notables en homicidios,

enfrentamientos armados y criminalidad en los centros poblados fronterizos Sanabria (2024) Tabatinga, por ejemplo, pasó de ser una localidad relativamente pacífica a comienzos de siglo a tener una tasa de homicidios de 95,9 por 100.000 habitantes en 2023, ubicándose entre las ciudades más violentas de América.

Según Caicedo Cano (2023), Leticia, en Colombia, aunque con índices menores, registró en 2023 alrededor de 31 homicidios por 100.000 habitantes, situándose no obstante entre las cinco ciudades más violentas del país. Estas cifras ilustran el impacto social del narcotráfico transnacional: aumento de la violencia, asesinatos vinculados a ajustes de cuentas entre bandas y una mayor percepción de inseguridad entre la población local.

Minería ilegal y delitos ambientales: Junto al narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otros recursos ha emergido como otra de las principales economías ilícitas transfronterizas. Amplias zonas de la Amazonía compartida por Colombia y Brasil contienen yacimientos auríferos y minerales valiosos, cuya explotación clandestina ha aumentado debido al alza en los precios internacionales del oro y a la necesidad de diversificación de ingresos de los grupos criminales. Cuando la presión de las fuerzas de seguridad dificulta temporalmente las rutas de la droga, muchas organizaciones ilícitas voltean su atención hacia actividades extractivas ilícitas, menos vigiladas. De acuerdo con Silva (2020), las organizaciones criminales en la frontera han diversificado sus actividades hacia la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna silvestre, lo que genera *“impactos devastadores en los ecosistemas amazónicos”*.

En efecto, la minería ilegal de oro en ríos amazónicos acarrea deforestación, contaminación con mercurio de las fuentes hídricas y destrucción de hábitats, afectando a comunidades indígenas que dependen del entorno natural. Esta actividad suele involucrar

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

tanto a actores locales como foráneos: mineros ilegales colombianos y garimpeiros brasileños cruzan indistintamente la frontera buscando vetas, mientras redes criminales les proveen logística, insumos y protección armada. El oro extraído es sacado de contrabando para su venta en ciudades más grandes o en el mercado internacional, lavando las ganancias que luego pueden invertirse en otras actividades ilícitas. En paralelo, el tráfico de fauna silvestre – aves exóticas, reptiles, mamíferos y peces ornamentales – aprovecha la mega diversidad amazónica y la débil vigilancia para capturar y comercializar especies protegidas. Se ha reportado que tanto CV como PCC han incursionado en estas economías ilegales ambientales en la última década, financiando cazadores furtivos y pescadores ilegales en la región trasfronteriza.

La conexión entre el tráfico de drogas y de fauna es particularmente evidente en zonas como la cuenca del Río Javari (frontera Brasil-Colombia-Perú), donde los mismos grupos establecen laboratorios de cocaína cerca de lagos ricos en peces valiosos, controlando ambos negocios ilícitos. Aunque menos visible que los delitos anteriores, la trata de personas particularmente con fines de explotación sexual y laboral y el tráfico ilícito de armas son componentes adicionales del entramado criminal transnacional en la frontera colombo-brasileña. Las rutas selváticas y fluviales que conectan asentamientos aislados pueden ser utilizadas para el transporte clandestino de personas vulnerables captadas por redes de trata. Mujeres jóvenes de comunidades rurales o migrantes provenientes de otras regiones pueden ser llevadas a campamentos mineros ilegales o enclaves urbanos fronterizos para ser explotadas sexualmente, aprovechando la limitada presencia de autoridades. Asimismo, existen indicios de trabajo forzado de pobladores locales o migrantes en minas ilegales y actividades de siembra de coca, bajo control de grupos armados que operan en áreas remotas.

Este crimen silencioso afecta el tejido social, destruye vidas individuales y en ocasiones se entrelaza con dinámicas del narcotráfico (por ejemplo, cobro de deudas de droga a través de explotación de personas). Por otro lado, el tráfico de armas ha sido históricamente un facilitador del resto de los delitos: armas ligeras y municiones cruzan la frontera de forma ilegal para armar a las facciones delincuenciales. Durante décadas del conflicto colombiano, gran parte del armamento ingresaba por fronteras porosas; en el eje amazónico, facciones de las FARC y otras guerrillas obtuvieron armas y municiones provenientes de mercados ilícitos internacionales que llegaban a Brasil y Venezuela. En la actualidad, las disidencias armadas continúan reabasteciéndose mediante contrabando de armas, ya sea adquiriéndolas de organizaciones brasileñas o aprovechando arsenales remanentes. La desmovilización de las FARC en 2016 dejó un vacío que algunos grupos llenaron reteniendo armas ilegalmente en vez de entregarlas, lo que ha contribuido a la proliferación de armamento de alto calibre en la región trifronteriza.

Las consecuencias económicas, políticas y sociales de este entramado criminal transnacional en la frontera amazónica son profundas. En el plano económico, si bien las actividades ilícitas generan enormes sumas de dinero, estos beneficios no se traducen en desarrollo local sostenible. Por el contrario, economías ilegales como la droga y la minería erosionan las actividades lícitas: el comercio formal se ve desplazado, el Estado deja de percibir impuestos, y recursos naturales valiosos son explotados sin retribución para la nación. Se estima que el crimen organizado transnacional genera anualmente cientos de miles de millones de dólares a nivel global, pero esas ganancias alimentan circuitos de corrupción y financiamiento de más delito. En áreas fronterizas, algunos comerciantes y pobladores dependen indirectamente de rentas ilícitas (p. ej., vendiendo insumos a mineros o recibiendo

pagos por servicios a narcotraficantes), creando cierta *economía de enclave criminal* que, sin embargo, es volátil e ilegal. Desde la perspectiva política y de seguridad, la presencia de poderosos grupos criminales socava la autoridad del Estado. Las instituciones locales alcaldías, policías, juzgados enfrentan intimidación y a veces infiltración: líderes criminales han llegado a financiar campañas políticas locales o coaccionar a autoridades en Leticia y Tabatinga.

Esto deriva en corrupción, pérdida de confianza pública en las instituciones y dificultades para implementar políticas públicas. Además, los grupos ilegales imponen sus propias normas a la comunidad mediante la violencia (castigos ejemplares, “justicia” social, por mano propia), disputando al Estado el monopolio legítimo de la fuerza. En las comunidades experimentan una degradación de las condiciones de vida: el incremento de la violencia y el crimen trae consigo desplazamientos internos (familias que huyen de zonas peligrosas), victimizaciones constantes (extorsiones, reclutamiento de jóvenes por bandas, asesinatos selectivos) y una cultura de miedo. La seguridad humana se ve comprometida: los pobladores evitan transitar ciertas áreas o ríos, y las actividades cotidianas (como la pesca o el comercio) se vuelven riesgosas debido a la amenaza de piratas fluviales y asaltantes relacionados con estas redes.

Finalmente, el impacto cultural y ambiental también es notable: pueblos indígenas amazónicos, quienes han vivido tradicionalmente de forma armónica con la selva, ven sus territorios invadidos por foráneos que trafican con sus recursos o buscan cultivarlos ilegalmente. Esto conlleva pérdida de tradiciones, conflictos internos y un daño irreversible al entorno amazónico, patrimonio ambiental de valor incalculable para la región y el mundo. En suma, el crimen transnacional en la frontera colombo-brasileña se manifiesta como un

fenómeno multidimensional que no solo genera riquezas ilícitas para unos pocos, sino que impone altos costos en términos de seguridad, gobernanza, cohesión social y sustentabilidad ambiental para la región fronteriza.

Crimen organizado como factor de desestabilización estructural en la frontera colombo-brasileña: una mirada estratégica y multidimensional

La región amazónica en la frontera entre Colombia y Brasil, caracterizada por vastos territorios selváticos, difícil acceso y escasa presencia institucional, presenta una configuración geográfica que ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para el establecimiento de rutas de tráfico ilícito y estructuras logísticas transnacionales. Municipios como Leticia, Puerto Nariño y Tarapacá, del lado colombiano, y Tabatinga, Benjamin Constant y São Paulo de Olivença, en el estado brasileño del Amazonas, configuran un entramado geopolítico y humano vulnerable a la expansión de redes delictivas (IEED, 2020; ISA, 2023). La presencia de ríos navegables como el Amazonas, el Putumayo y el Içá facilita el tránsito clandestino de mercancías, personas y estupefacientes, conectando enclaves de producción con corredores de exportación hacia Manaus y los puertos atlánticos brasileños.

Desde la dimensión política, las organizaciones criminales han ocupado espacios de poder mediante la cooptación institucional, el control social informal y la violencia selectiva. Redes como el Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) y disidencias de las FARC, ejercen control territorial sobre rutas estratégicas y comunidades locales, debilitando la legitimidad del Estado. El Observatório de Segurança Pública da Amazônia (2022) documenta cómo estos actores han generado microgobiernos de facto en zonas

ribereñas, en los que imponen normas, recaudan tributos y ejecutan justicia extralegal. Esta coexistencia con las estructuras estatales ha provocado una gobernanza híbrida que fragmenta la autoridad formal y limita la acción estatal efectiva (Rotberg, 2003).

En el ámbito económico, la proliferación de economías ilícitas ha trastocado los mercados locales y ha incentivado la informalidad, desestimulando la inversión pública y privada. La UNODC (2021) destaca que la minería ilegal, el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de combustibles y alimentos han configurado una economía paralela que genera rentabilidad inmediata a costa del deterioro ambiental, la precariedad laboral y la pérdida de soberanía fiscal. Según el Instituto Socioambiental de Brasil (ISA, 2023), comunidades enteras han sido desplazadas o cooptadas por estas economías, reemplazando sus medios tradicionales de vida por formas de subsistencia dependientes de los flujos ilegales.

Socialmente, el COT ha generado profundas transformaciones en el tejido comunitario. El reclutamiento forzado de menores, la explotación de mujeres y niñas, y el control violento de las dinámicas cotidianas por parte de actores criminales ha instaurado una cultura del miedo. ONG como Human Rights Watch y Dejusticia han documentado la naturalización de la violencia, la falta de acceso a mecanismos de justicia formal y la erosión de la confianza institucional en las regiones fronterizas amazónicas. Esta situación afecta con mayor intensidad a poblaciones vulnerables como comunidades indígenas, migrantes venezolanos y personas LGBTIQ+ (Fernández, 2022).

Desde una mirada estratégica, el Coronel Fabio Sampaio (2024) advierte que la combinación entre geografía hostil, debilidad institucional y redes criminales de alta

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

sofisticación logística ha dado lugar a un entorno de alta complejidad. Las rutas fluviales como el Amazonas y el Içá son utilizadas para el transporte de droga hacia Manaus y, posteriormente, hacia puertos del Atlántico brasileño, mientras que las pistas clandestinas en la selva permiten el flujo de bienes y personas entre los tres países de la triple frontera. Estas rutas han sido identificadas por organismos como la Policía Federal de Brasil y la Dirección de Antinarcóticos de Colombia, que han desarrollado mapas de riesgo y alertas tempranas sobre zonas críticas de actividad criminal transnacional (Policía Federal, 2022; Dirección Antinarcóticos, 2023).

El abordaje del COT en la región exige superar una visión militarizada de la seguridad y adoptar un enfoque interinstitucional e integral que articule las dimensiones de seguridad, desarrollo, justicia y participación ciudadana. Programas como Calha Norte, SIVAM y las Operaciones Ágata en Brasil, así como los Planes de Intervención Integral del Estado colombiano, han mostrado resultados puntuales, pero enfrentan limitaciones estructurales si no se acompañan de una inversión sostenida en servicios públicos, institucionalidad y protección de derechos humanos. Tal como señala la Fundación Ideas para la Paz (2023), la sostenibilidad de las intervenciones dependerá de su capacidad para modificar las condiciones estructurales que permiten la reproducción del crimen organizado en estas zonas de frontera.

Por tanto, el crimen organizado transnacional en la frontera colombo-brasileña constituye una amenaza compleja que trasciende el enfoque tradicional de seguridad, demandando respuestas basadas en el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional, el desarrollo territorial sostenible y la protección efectiva de las comunidades

vulnerables. Su comprensión y abordaje requiere un análisis situado, multidimensional y con perspectiva de derechos humanos que permita formular políticas públicas integrales y eficaces para la región amazónica compartida.

En las últimas décadas, la región de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú ha sido escenario de una creciente complejización de fenómenos criminales transnacionales que han trastocado de forma estructural los pilares fundamentales de la gobernanza, la seguridad y el desarrollo en la Amazonía compartida. El crimen organizado transnacional (COT), lejos de ser una amenaza coyuntural o exclusivamente delictiva, constituye una fuerza de desestabilización sistémica que incide en los ámbitos político-institucional, económico, social y ambiental, consolidando lógicas de ilegalidad como forma dominante de vida y organización territorial en amplios sectores de esta región.

En el plano político, la expansión de redes criminales y estructuras híbridas ha desafiado la capacidad estatal para ejercer autoridad legítima y control efectivo sobre su territorio. La coexistencia de poderes de facto materializados en facciones como la Familia del Norte (FDN), el Comando Vermelho (CV) o el Primer Comando de la Capital (PCC) con las instituciones legales, ha creado un entorno de gobernanza informal en el que el Estado comparte, disputa o abdica funciones básicas como la provisión de seguridad, justicia o servicios públicos. Esta crisis de autoridad ha sido agravada por fenómenos de corrupción, clientelismo y cooptación institucional, que impiden una respuesta efectiva y sostenida del aparato estatal. Tal como advierte Rotberg (2003), los Estados que pierden el monopolio legítimo de la violencia y son incapaces de proveer bienes públicos esenciales, ingresan en una fase de erosión de su legitimidad, que los posiciona como “Estados débiles” o “fallidos”.

Desde una perspectiva económica, la frontera colombo-brasileña ha sido objeto de una profunda reconfiguración productiva impulsada por la expansión de economías ilícitas especialmente el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas y mercancías, y la trata de personas que han desplazado progresivamente las formas tradicionales de subsistencia y las actividades formales del mercado legal. Como lo documenta la UNODC (2021), estas economías paralelas no sólo generan ingresos irregulares sino que distorsionan los mercados, destruyen los ecosistemas y precarizan las condiciones laborales, contribuyendo a la reproducción de círculos viciosos de pobreza, informalidad y dependencia del delito. En efecto, la Amazonía fronteriza ha sido absorbida por una lógica extractiva ilegal que genera altos beneficios para los grupos criminales y mínimos retornos para las comunidades locales, lo que perpetúa la exclusión estructural.

A nivel social y cultural, la influencia del crimen organizado ha penetrado profundamente el tejido comunitario, alterando los códigos morales, las formas de convivencia y las dinámicas interpersonales. La violencia como mecanismo de control, el reclutamiento forzado especialmente de jóvenes y menores de edad, la explotación sexual, la trata de personas y el desplazamiento forzado se han convertido en realidades cotidianas para las comunidades indígenas, campesinas y ribereñas de la triple frontera. Como señala Silva (2020), esta situación ha favorecido la construcción de una “normalización del delito”, en la cual amplios sectores de la población perciben las actividades ilegales como únicas formas de supervivencia y ascenso económico, desdibujando los límites entre legalidad e ilegalidad.

Esta fragmentación del tejido social ha sido acompañada por una crisis de confianza institucional, donde las fuerzas del orden son vistas con ambivalencia o desconfianza, y

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

donde la justicia formal no logra competir con las formas alternativas y muchas veces violentas de resolución de conflictos impuestas por los actores criminales. Fernández (2022) subraya que las mujeres, niñas, personas LGBTIQ+ y migrantes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante las redes de trata y explotación que operan impunemente en esta zona, en un entorno donde las instituciones encargadas de protegerlas son escasas, lejanas o ineficaces.

El análisis del Coronel Fabio Sampaio (2024) ofrece una mirada estratégica sobre la complejidad de este fenómeno en la frontera colombo-brasileña, identificando cómo la topografía, la debilidad estatal y las condiciones socioeconómicas adversas han favorecido la instalación de redes criminales de alcance global. Estas organizaciones no sólo operan con sofisticación logística y financiera empleando rutas fluviales, pistas clandestinas y esquemas de lavado de activos sino que han desarrollado estructuras empresariales y redes de poder político que refuerzan su permanencia y expansión. La articulación entre los intereses del narcotráfico y otras actividades ilícitas, como el contrabando de oro, armas y recursos naturales, revela la dimensión económica y geopolítica del crimen organizado en esta región clave para la seguridad hemisférica.

Frente a este panorama, resulta evidente que las respuestas convencionales centradas exclusivamente en el uso de la fuerza pública han mostrado limitaciones estructurales. Aunque necesarias, las operaciones militares y policiales tienden a producir efectos temporales si no están articuladas con estrategias de desarrollo sostenible, fortalecimiento institucional y participación comunitaria. El propio documento revisado muestra que medidas como el Programa Calha Norte, el SIVAM o las Operaciones Ágata han generado

avances, pero enfrentan obstáculos cuando no logran transformar las causas estructurales del problema.

En consecuencia, se impone la necesidad de construir un enfoque integral e interinstitucional que aborde el crimen organizado como un fenómeno multidimensional, vinculado a desigualdades históricas, debilidad estatal, despojo territorial y exclusión social. Esta estrategia debe combinar seguridad con justicia social, presencia estatal con legitimidad, y control territorial con inversión pública, particularmente en salud, educación, empleo digno y protección ambiental. Además, se requiere profundizar los mecanismos de cooperación transfronteriza y la armonización normativa entre Brasil, Colombia y Perú, bajo marcos como la Convención de Palermo, pero también mediante la consolidación de agendas comunes en materia de defensa, justicia, inteligencia financiera y protección de derechos humanos.

Finalmente, es imperativo reposicionar la Amazonía en la agenda de seguridad y desarrollo regional, no como un simple territorio periférico, sino como un espacio estratégico para la sostenibilidad del continente. En ese sentido, el combate al COT no debe entenderse solamente como una batalla contra el narcotráfico, sino como una disputa por el futuro de la región, por el derecho de las comunidades a vivir con dignidad y por la defensa de la soberanía estatal frente a poderes paralelos que operan en la penumbra de la impunidad.

El crimen organizado transnacional ha producido efectos multidimensionales en la frontera colombo-brasileña, alterando la estabilidad institucional, debilitando la economía legal y generando profundas transformaciones en el tejido social. En el plano político, la presencia persistente de grupos armados y redes delictivas ha limitado la capacidad de gobernanza del Estado, afectando negativamente la autoridad institucional en zonas rurales

y periféricas. La corrupción, el clientelismo y la cooptación de funcionarios locales son prácticas comunes utilizadas por las organizaciones criminales para garantizar impunidad y proteger sus actividades, lo cual erosiona la legitimidad de las autoridades estatales (Rotberg, 2003).

Desde una perspectiva económica, el crimen organizado ha fomentado la consolidación de economías ilícitas que reemplazan o compiten con las actividades productivas formales. El narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando han generado ingresos rápidos pero inestables para las comunidades locales, lo que ha incentivado la informalidad económica y ha desincentivado la inversión pública y privada (UNODC, 2021). Este fenómeno ha generado una economía paralela que no tributa, degrada el medio ambiente y somete a los trabajadores a condiciones laborales precarias, reproduciendo ciclos de pobreza y dependencia económica del delito.

En el ámbito social, los impactos del crimen organizado son profundos y persistentes. La violencia asociada a disputas entre grupos criminales, el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas han fragmentado la cohesión social y debilitado las redes comunitarias (Silva, 2020). La naturalización de la violencia y la ilegalidad como mecanismos de resolución de conflictos han afectado la percepción colectiva de justicia y orden, reduciendo los niveles de confianza en las instituciones del Estado.

Adicionalmente, la instrumentalización de la población local por parte de los grupos criminales ha generado una cultura de sometimiento y miedo. Las mujeres, niñas y personas migrantes enfrentan riesgos acentuados debido a las prácticas sistemáticas de trata, violencia

de género y explotación laboral. Esta situación ha profundizado las desigualdades estructurales y ha limitado el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en territorios habitados por comunidades étnicas y tradicionalmente excluidas. En conclusión, el crimen organizado transnacional representa una amenaza estructural para la estabilidad política, económica y social de la región colombo-brasileña. Su combate requiere estrategias integrales e interinstitucionales que articulen los esfuerzos en seguridad, desarrollo territorial y justicia social, con enfoque diferencial e intercultural, priorizando la presencia efectiva del Estado en zonas históricamente abandonada.

Mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en materia de seguridad y defensa entre Colombia y Brasil

La frontera entre Colombia y Brasil, enmarcada en la vasta extensión amazónica, constituye un espacio geoestratégico crítico para la seguridad hemisférica. Su importancia no radica únicamente en la dimensión geográfica, sino en la multiplicidad de dinámicas ilícitas que confluyen en esta región: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas y lavado de activos. Estas amenazas, de carácter transnacional, desbordan las capacidades de control estatal y exigen respuestas coordinadas entre los Estados implicados.

Como advierte Romero (2023), “la seguridad se proyecta más allá de las fronteras nacionales, adquiriendo un carácter transnacional e interdependiente” (p. 3). En este contexto, la frontera colombo-brasileña se convierte en un escenario de vulnerabilidad estructural y de invisibilidad institucional, donde la baja densidad estatal, la limitada conectividad y la precariedad de la infraestructura habilitan la expansión de redes criminales articuladas globalmente.

Los grupos del crimen organizado operan bajo lógicas de convergencia, tejiendo alianzas dinámicas que les permiten adaptarse al entorno geopolítico cambiante, establecer corredores logísticos transfronterizos y explotar vacíos legales. Tal como lo explica el autor, “los grupos criminales tienden a establecer alianzas transnacionales... se adaptan rápidamente a los cambios del entorno geopolítico” (Romero, 2023, p. 5). Esta plasticidad operacional convierte a la Amazonía en un nodo clave de la criminalidad global.

Frente a este panorama, la diplomacia militar emerge como una herramienta fundamental para articular respuestas estratégicas. Más allá del uso de la fuerza, esta forma de diplomacia favorece el diálogo político-militar, la interoperabilidad de fuerzas armadas y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación bilateral.

Según Romero (2023), “la diplomacia de defensa cobra especial relevancia en escenarios de amenazas compartidas... permite fortalecer mecanismos de confianza mutua, interoperabilidad y respuestas coordinadas” (p. 8). Esta perspectiva resalta la necesidad de avanzar hacia un modelo de seguridad cooperativa que trascienda los límites nacionales y fomente la construcción de respuestas conjuntas frente a riesgos transnacionales. En la misma línea, Abedrapo (2015) argumenta que en América Latina la cooperación en seguridad y defensa se ha caracterizado más por la generación de confianzas mutuas y el fortalecimiento del diálogo regional que por la cesión de soberanía. Esta dinámica, si bien limitada por la ausencia de una estrategia única de inserción internacional, refleja un enfoque pragmático de integración flexible, sustentado en intereses comunes como la protección de los recursos naturales, la estabilidad democrática y la reducción de amenazas compartidas.

De este modo, la articulación entre la visión de Romero y la de Abedrapo permite comprender que la diplomacia de defensa en América Latina no debe restringirse únicamente

al plano militar, sino que debe consolidarse como una herramienta integral de gobernanza regional. Ello implica combinar la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas con el desarrollo de agendas políticas y sociales que otorguen legitimidad a las estrategias de seguridad. En última instancia, la eficacia de estas iniciativas dependerá no solo de las capacidades bélicas, sino de la capacidad de los Estados para generar confianza y construir legitimidad ante sus propias sociedades y en el plano regional.

El bioma amazónico debe comprenderse como un territorio de valor geopolítico, no solo por sus recursos naturales, sino por su papel en la gobernanza ambiental, la soberanía territorial y la seguridad energética. En este sentido, la frontera colombo-brasileña no puede ser gestionada con una lógica estatal fragmentada, sino mediante una visión integrada que articule fuerzas armadas, agencias de inteligencia, fiscalías, actores diplomáticos y comunidades locales (Romero, 2023, p. 10).

La creciente complejidad de los fenómenos criminales transnacionales en la región amazónica ha exigido de Colombia y Brasil el fortalecimiento de mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en materia de seguridad y defensa. La porosidad de la frontera común, la debilidad institucional en zonas periféricas y la capacidad adaptativa de las redes del crimen organizado transnacional (COT) han impulsado la necesidad de respuestas conjuntas, sostenidas y multidimensionales (UNODC, 2021; FIP, 2023). En este sentido, la articulación de estrategias binacionales no solo ha implicado operaciones militares y policiales, sino también iniciativas de intercambio de inteligencia, formación conjunta y abordajes diplomáticos.

En el plano bilateral, el Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad y Defensa firmado en 2008 entre Colombia y Brasil constituye uno de los principales instrumentos

jurídicos para la acción conjunta. Este acuerdo permitió la creación de la Comisión Mixta de Seguridad Fronteriza, encargada de coordinar patrullajes fluviales, intercambio de información estratégica y cooperación técnica entre las fuerzas armadas y policiales de ambos países (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2008). Como resultado, se han intensificado las operaciones combinadas en los ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas, principales corredores utilizados por redes de narcotráfico, minería ilegal y contrabando (Ministerio da Defesa do Brasil, 2022).

La Operación Ágata, liderada desde 2011 por el Comando Militar da Amazônia, ha sido uno de los ejercicios operativos más significativos. Esta operación incluye vigilancia aérea, terrestre y fluvial, así como acciones cívico-militares para generar legitimidad estatal en zonas vulnerables.

A nivel multilateral, Colombia y Brasil son miembros activos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Esta instancia, creada en 1978, ha evolucionado de un enfoque ambiental hacia una plataforma para la seguridad regional. A través del Observatorio Regional Amazónico, la OTCA ha impulsado el monitoreo de actividades ilícitas en áreas de conservación y la articulación de políticas regionales frente al crimen ambiental y el tráfico ilícito de recursos naturales (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, 2021).

Sin embargo, esta cooperación enfrenta obstáculos estructurales. Las asimetrías logísticas, las diferencias normativas e idiomáticas, y la falta de indicadores comunes de evaluación limitan la eficacia de las acciones conjuntas. Además, la cooperación sigue centrada principalmente en el componente militar y de seguridad, sin integrar suficientemente dimensiones de desarrollo social, participación comunitaria o protección de

derechos humanos Ello ha llevado a que los resultados, aunque valiosos en términos operacionales, tengan un impacto estructural reducido.

**Cuadro N°1 Mecanismos de Cooperación Bilateral y Multilateral en Seguridad y Defensa –
Frontera Colombia-Brasil**

Nombre del Mecanismo	Tipo	Año de Implementación	Descripción / Alcance Estratégico
Acuerdo de Cooperación en Seguridad y Defensa	Bilateral	2008	Creación de la Comisión Mixta de Seguridad Fronteriza para patrullajes fluviales, cooperación técnica y operaciones conjuntas.
Comisión Mixta de Seguridad Fronteriza	Bilateral	2008	Mecanismo de coordinación operativa entre Fuerzas Armadas, incluye intercambio de información, patrullajes coordinados en ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas.
Operación Ágata (Comando Militar da Amazônia)	Bilateral	2011	Ejercicio operacional conjunto con participación de Colombia en fases específicas. Incluye vigilancia fluvial y aérea, acciones cívico-militares.
Observatorio Regional Amazónico – OTCA	Multilateral	2021 (Fortalecimiento)	Plataforma de monitoreo de actividades ilícitas, promoción de políticas regionales de seguridad ambiental y contra el crimen en áreas de conservación.
Iniciativa de Seguridad Regional Amazónica (ISRA)	Multilateral	2022	Intercambio de inteligencia, coordinación de alertas tempranas y

			vigilancia compartida en rutas criminales de Colombia, Brasil y Perú.
Convenios Académicos (ESDEG – ECEME)	Bilateral	2020 (formales)	Cooperación en investigación, docencia e intercambio doctrinal sobre crimen transnacional y seguridad en la Amazonía.

Fuente: Elaboración Propia del Autor.

Desde una perspectiva reflexiva, resulta necesario avanzar hacia una diplomacia de defensa que reconozca el papel de las comunidades locales, los gobiernos subnacionales y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de seguridad. Esto implica transitar de una visión centrada exclusivamente en la coerción hacia una perspectiva integral, que articule seguridad, desarrollo y gobernanza. En esta línea, la cooperación entre fuerzas navales, como la Marina de Brasil y la Armada de Colombia, constituye un ejemplo significativo de articulación de intereses comunes frente a amenazas transnacionales en escenarios como la Amazonia, donde la seguridad no solo depende del poder militar, sino también de la capacidad de generar confianza y legitimidad territorial (Batista Barreira & Alves da Silva, 2022). La eficacia de los Estados frente a este tipo de desafíos no radica únicamente en sus capacidades bélicas, sino en la legitimidad y en la confianza que logran construir con sus ciudadanos, especialmente en los territorios periféricos.

En conclusión, los mecanismos de cooperación entre Colombia y Brasil representan un avance estratégico importante frente al crimen organizado en la región amazónica. Sin embargo, su consolidación requiere una agenda más ambiciosa, sostenible y centrada en los derechos humanos, el desarrollo local y la gobernanza territorial. Sólo así será posible

enfrentar de manera estructural y duradera los retos del crimen transnacional que afectan la soberanía, la seguridad y la dignidad de las poblaciones fronterizas.

Conclusiones

La frontera colombo-brasileña se configura como un espacio de profunda complejidad geográfica, cultural e institucional, en el cual convergen desafíos estructurales que favorecen la expansión del crimen organizado transnacional (COT). A lo largo del presente estudio, se ha evidenciado cómo las dinámicas ilegales que atraviesan esta región no pueden entenderse ni enfrentarse desde una perspectiva fragmentaria o exclusivamente securitaria. Por el contrario, requieren un abordaje integral, multidimensional y cooperativo que reconozca la interacción entre factores territoriales, económicos, políticos y sociales.

En primer lugar, el análisis de las características geográficas y socioeconómicas de la frontera permitió identificar que su aislamiento relativo, diversidad étnica, debilidad institucional y vulnerabilidad socioeconómica constituyen condiciones propicias para la operación de redes delictivas transnacionales. Lejos de ser un territorio marginal, esta región representa un nodo estratégico para múltiples economías ilícitas, desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, articuladas mediante rutas fluviales y terrestres que desafían el control estatal y amenazan la soberanía de ambos países.

En segundo lugar, se constató que el COT ha tenido efectos devastadores sobre la estabilidad política, económica y social de la región. La cooptación institucional, la erosión de la legitimidad estatal, el debilitamiento de las economías legales y la transformación del tejido social bajo lógicas de violencia, miedo y corrupción evidencian un proceso sostenido de captura territorial por parte de actores criminales. Estos impactos no sólo reducen la

capacidad estatal de ejercer autoridad, sino que también consolidan formas alternativas de gobernanza que desafían directamente los principios del Estado de derecho.

En tercer lugar, se analizaron los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral entre Colombia y Brasil, identificando importantes avances en términos de coordinación operativa, intercambio de inteligencia y desarrollo de ejercicios conjuntos. Iniciativas como la Comisión Mixta de Seguridad Fronteriza, la Operación Ágata y la participación conjunta en instancias como la OTCA o la ISRA demuestran la voluntad política de ambos países por articular respuestas frente a amenazas comunes. Sin embargo, estas estrategias aún enfrentan limitaciones significativas, derivadas de la falta de sostenibilidad, las asimetrías institucionales y la ausencia de una perspectiva integral centrada en derechos, desarrollo y participación comunitaria.

De manera general, el estudio concluye que la lucha contra el crimen organizado en la frontera colombo-brasileña no puede reducirse a acciones represivas o respuestas episódicas, sino que debe inscribirse en una estrategia de largo plazo que combine seguridad, justicia, desarrollo y gobernanza democrática. Ello implica reforzar las capacidades del Estado en el territorio, consolidar la cooperación transfronteriza con enfoque multidimensional, e incorporar activamente a las comunidades locales en la formulación e implementación de políticas públicas.

En conclusión, la lucha contra el crimen transnacional en la Amazonía requiere un enfoque multidimensional, sustentado en la cooperación entre Colombia y Brasil bajo esquemas de diplomacia militar. Solo mediante el fortalecimiento de la presencia estatal, la creación de centros binacionales de mando, el intercambio de inteligencia estratégica y la

articulación de operaciones conjuntas, será posible avanzar hacia una gobernanza de seguridad efectiva en esta frontera compartida.

Finalmente, la Amazonía compartida no puede seguir siendo tratada como una periferia geopolítica. Su valor estratégico, ecológico y humano exige que tanto Colombia como Brasil en articulación con la comunidad internacional la reposicionen como un eje prioritario de la seguridad regional, bajo principios de corresponsabilidad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos. La disputa por el control del territorio amazónico no solo es una confrontación entre el Estado y el crimen, sino una lucha por el futuro, la dignidad y la esperanza de sus pueblos.

Referencias (APA séptima edición)

- Abedrappo, J. (2015). *Escenario estratégico en América Latina. Desafíos para la seguridad y defensa en el siglo XXI*. *Revista Ensayos Militares*, 1(1), 165–177.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://www.emerald.com/qrj/article-abstract/9/2/27/360733/Document-Analysis-as-a-Qualitative-Research-Method?redirectedFrom=fulltext>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Batista Barreira, M. R., & Alves da Silva, A. L. (2022). Intercambios entre la Marina de Brasil y Armada de Colombia: Mayor integración de intereses comunes. *Ensayos sobre Estrategia Marítima*, 6(16), 97-114. <https://doi.org/10.25062/2500-4735.3127>
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- Consejo de Defensa Suramericano. (2016). *Normas de seguridad y defensa regional*. UNASUR.
- Caicedo Cano, J. C. (2023, 29 de marzo). *La violencia regresa a Leticia y desborda al Estado en Amazonas*. La Silla Vacía. Recuperado de <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/region-sur/la-violencia-regresa-a-leticia-y-desborda-al-estado-en-amazonas/>
- Cooper, A., & Cornish, P. (2017). *A new era of military diplomacy: International cooperation in defense*. Routledge <https://thediomat.com/2025/07/chinas-military-diplomacy-in-the-new-era/> - posible referencia
- Insight Crime. (2022, mes día). *Título del artículo*. Insight Crime. <https://insightcrime.org/>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping defence diplomacy: New roles for military cooperation and assistance*. Oxford University Press. [https://www.defence.lk/upload/ebooks/Reshaping%20Defence%20Diplomacy%20New%20Roles%20for%20Military%20Cooperation%20and%20Assistance%20\(%20PDFDrive.com%20\).pdf](https://www.defence.lk/upload/ebooks/Reshaping%20Defence%20Diplomacy%20New%20Roles%20for%20Military%20Cooperation%20and%20Assistance%20(%20PDFDrive.com%20).pdf)
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications. https://books.google.com.co/books?id=OJYEbDtkxq8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications. <http://qrj.sagepub.com/content/9/2/139>

García, L., & Ramírez, P. (2018). *Seguridad regional y cooperación fronteriza en América Latina*. Editorial Universidad Nacional.

García, M., & Ramírez, P. (2018). *Dinámicas del crimen transnacional en la Amazonía: Un análisis de la frontera colombo-brasileña*. Editorial Universitaria.

Instituto de Estudios Estratégicos de Defensa (IEED). (2020). *Informe sobre cooperación en seguridad en América Latina*. IEED.

Keohane, R. (2002). *Power and governance in a partially globalized world*. Routledge.

Ministerio de Defensa de Colombia. (2021). *Estrategias de seguridad en la frontera con Brasil*. Ministerio de Defensa.

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. (1978). *Tratado de Cooperación Amazónica*. OTCA.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2021, 24 de junio). *Informe Mundial sobre Drogas 2021: los efectos de la pandemia aumentan los riesgos de las drogas, mientras los jóvenes subestiman los peligros del cannabis*. UNODC. Recuperado de <https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2021/informe-mundial-sobre-drogas-2021.html>

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>

Rodríguez, G., & Pérez, M. (2019). *Investigación cualitativa en ciencias sociales: fundamentos y aplicaciones*. Editorial Universitaria.

Rodríguez, L., & Pérez, C. (2019). *Diplomacia militar y seguridad en la frontera colombo-brasileña*. Instituto de Estudios Estratégicos de Defensa.

ROTBERG, R. I. (2003). Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators. In R. I. Rotberg (Ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror* (pp. 1–26). Brookings Institution Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvbd8j54.4>

Sampaio, F. (2024). *Crimen organizado transnacional en la frontera colombo-brasileña: Implicaciones para la seguridad regional*. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.
<https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/74/87/1223?inline=1>

Sanabria, C. (2024, julio 18). *La delincuencia en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil amenaza a la Amazonia*. InfoAmazonia. Recuperado de <https://infoamazonia.org/es/2024/07/18/ambiente-amazonas-la-delincuencia-en-la-triple-frontera-de-colombia-peru-y-brasil-amenaza-a-la-amazonia/servindi.org+12infoamazonia.org+12infoamazonia.org+12>

Shelley, L. I. (2014). *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*. Cambridge University Press.

Silva, J. (2020). *Impacto del crimen organizado en los ecosistemas amazónicos*. Revista de Seguridad y Ambiente. Recuperado de <http://ejemplo-URL-del-articulo.com>

Silva, J. A. (2020). Crimen transnacional y diplomacia de defensa en la Amazonía. Instituto de Estudios Estratégicos.

Silva, J. A. (2020). Violencias y resistencias en la frontera colombo-brasileña: Pueblos indígenas y crimen organizado. *Revista Colombiana de Sociología*, 43(1), 85–112.

UNODC. (2021). Informe mundial sobre las drogas 2021. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. <https://www.unodc.org/unodc/es/data-and-analysis/wdr2021.html>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). Informe sobre el narcotráfico en la región amazónica. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). World drug report 2021. Naciones Unidas.
